CONGRESO DE LA REPÚBLICA
AREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
25 NOV. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:02 h.

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional".

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, actualizado por el Grupo Parlamentario Podemos Perú, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional".

Luego de la exposición y debate en la Sétima Sesión Ordinaria de fecha 09 de noviembre de 2022 se acordó por unanimidad el ARCHIVO del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional"; con dieciocho (18) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Guido Bellido Ugarte, Ilich Fredy López Ureña, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Silvia María Monteza Facho, Juan Carlos Mori Celis, María Grimaneza Acuña Peralta, Álex Antonio Paredes Gonzales, Rosio Torres Salinas, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Carlos Antonio Anderson Ramírez.

I. SITUACION PROCESAL DE LA PROPUESTA

Con fecha 17 de marzo de 2021, fue remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 7362/2020-CR, presentado a iniciativa del Congresista José Luis Luna Morales, miembro del Grupo Parlamentario Podemos Perú, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional" Proyecto de Ley 1057/2021-CR durante la Tercera Legislatura Ordinaria 2020.

Con fecha 17 de agosto de 2021, el Proyecto de Ley 7362/2020-CR fue decretado al Archivo por Acuerdo del Consejo Directivo N° 19-2021-2022/CONSEJO-CR.

Con fecha 13 de diciembre de 2021, por Acuerdo del Consejo Directivo se decretó la actualización del Proyecto de Ley 7362/2020-CR asignándole el número 1057/2021-CR.

El Proyecto de Ley 1057/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 23 de diciembre de 2021. Ha sido decretado a la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos como primera Comisión Dictaminadora y a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como segunda Comisión Dictaminadora el 6 de enero de 2022.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 1507/2021-CR tiene por objeto otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la capacidad técnica de aplicar salvaguardias para proteger al consumidor y la producción nacional.

El texto normativo de la propuesta legislativa se detalla en el siguiente cuadro:

LEY PARA CONSOLIDAR LAS FACULTADES DEL INDECOPI EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL	
Artículo 1. Objeto	La presente Ley, tiene por objeto otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la capacidad técnica de aplicar Salvaguardas ***(sic)*** para proteger al consumidor y la producción nacional.
Artículo 2. Del Informe Técnico	Los hallazgos y/o comprobaciones de la Comisión de Dumping y Subsidios (CDS) del INDECOPI con respecto al cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos para imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, son incuestionables e incontrovertibles, siempre y en todos los casos.
Artículo 3. De la Aplicación de Salvaguardias	La Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, no puede cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la CDS que recomienda imponer salvaguardias provisionales y/o definitivas, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico respectivo.
Disposición Complementaria Derogatoria	Deróguese toda norma y disposición legal que se oponga a la presente Ley.
Disposiciones Complementarias Finales	ÚNICA. La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú, artículos 74 y 118.

3.2 Acuerdo sobre Salvaguardias, que administra la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3.3 Resolución Legislativa N° 26407, "Aprueban Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay".

3.4 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

3.5 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

3.6 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

3.7 Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas.

3.8 Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

3.9 Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N°017-2004-MINCETUR, que aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos de Salvaguardias y de Textiles y Vestidos de la Organización Mundial del Comercio.

3.10 Decreto Supremo N° 099-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

3.11 Resolución Ministerial N° 005-2006-EF, Aprueban "Lineamientos de Política Arancelaria".

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Mediante Oficio Nº 886-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de enero de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

4.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Mediante Oficio Nº 885-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de enero de 2022, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 1429-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se reiteró opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

4.3 Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Mediante Oficio Nº 887-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de enero de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

4.4 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Mediante Oficio Nº 884-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de enero de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

4.5 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

Mediante Oficio Nº 883-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 21 de enero de 2022, se solicitó opinión a la Presidencia de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios sobre el Proyecto de Ley 1057/2021-CR.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Mediante Oficio Nº D000660-2022-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº D000385-2022-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, la propuesta legislativa 1057/2021-CR, no se ampara en las normas establecidas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio y en la Constitución Política del Perú, por lo que **no se considera viable su aprobación**.

5.2 Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Mediante Oficio Nº 00000130-2022-PRODUCE/DM, el Ministerio de la Producción adjunta el Informe Nº 00000366-2022-PRODUCE/OGAJ mediante el cual, en mérito

de las opiniones técnicas emitidas por la Dirección General de Desarrollo Empresarial y la Dirección de Políticas, la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros emite **opinión desfavorable** al Proyecto de Ley N° 1057/2021-CR, "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional"; por cuanto su aprobación vulneraría las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI,las competencias atribuidas en forma exclusiva al Poder Ejecutivo, así como a los respectivos sectores involucrados, además de contravenir a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay", incorporado a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa N° 26407.

5.3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Mediante Oficio Nº 232-2022-MINCETUR/DM, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo remite el Informe N° 0037-2022-MINCETUR/SG/AJ-MAG, adjunto al Memorándum N° 374-2022-MINCETUR/SG/AJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del cual, considera consistente con la Constitución Política del Perú que sea el Poder Ejecutivo el que decida, en el ámbito de su competencia, que la Comisión Multisectorial sea la encargada de decidir si aplica o no una medida de salvaguardia o si suspende o revoca una salvaguardia ya impuesta; puesto que, al ser ésta un gravamen arancelario se estaría respetando la potestad tributaria asignada constitucionalmente al Poder Ejecutivo, acto que se materializa con un decreto supremo emitido por el MINCETUR, y refrendado por los miembros de la referida Comisión Multisectorial, entre los que se encuentra el Ministro de Economía y Finanzas; y siendo, finalmente refrendado y promulgado por el Presidente de la República. En consecuencia, se considera **no viable la aprobación** del Proyecto de Ley N° 1057/2021-CR.

5.4 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Mediante Oficio Nº D000043-2022-PRE/INDECOPI, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual adjunta el Informe Nº 0000079-2022-OAJ/INDECOPI emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Burocráticas Comerciales No Arancelarias, mediante el cual se considera que, la propuesta legislativa 1057/2021-CR, no se ampara en las normas establecidas en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio y en la

Constitución Política del Perú, por lo que la Secretaría Técnica del Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Burocráticas Comerciales No Arancelarias concluye que **no es viable la aprobación** de la propuesta legislativa materia de estudio.

5.5 Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Mediante Carta N° 09–2022/GG/COMEXPERU, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú considera que el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional", desnaturalizaría las medidas de salvaguardia y su carácter extraordinario y generaría que se incumplan los compromisos asumidos por el Perú en materia de comercio exterior, además de transgredir el marco legal vigente, por lo que **no debería ser aprobado**.

5.6 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)

A la fecha no se ha recibido la opinión correspondiente.

VI. ANALISIS DE LA PROPUESTA

6.1 Antecedentes

El 30 de octubre de 1947, veintitrés países firmaron el Acta Final del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)[1] tras un período de intensas negociaciones. A los países signatarios del GATT se les denominaba oficialmente "Partes Contratantes del GATT"[2].

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT de 1947)
Artículo XIX

Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados

[1] El 1° de enero de 1995, la OMC sustituyó al GATT, que llevaba en funcionamiento desde 1947, como organización encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio. A los países signatarios del GATT se les denominaba oficialmente "Partes Contratantes del GATT". El Perú fue parte contratante del GATT de 1947 desde el 7 de octubre de 1951 y es miembro fundador de la OMC desde el 1° de enero de 1995. Los Acuerdos de la OMC fueron incorporados a la legislación nacional mediante Resolución Legislativa N° 26407 "Aprueban Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda Uruguay" de fecha 16 de diciembre de 1994.
[2] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm

1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión.

   b) Si una parte contratante ha otorgado una concesión relativa a una preferencia y el producto al cuál se aplica es importado en un territorio de dicha parte contratante en las circunstancias enunciadas en el apartado a) de este párrafo, en forma tal que cause o amenace causar un daño grave a los productores de productos similares o directamente competidores, establecidos en el territorio de la parte contratante que se beneficie o se haya beneficiado de dicha preferencia, esta parte contratante podrá presentar una petición a la parte contratante importadora, la cual podrá suspender entonces total o parcialmente la obligación contraída o retirar o modificar la concesión relativa a dicho producto, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño.

En el GATT de 1947 las medidas de salvaguardia se regían únicamente por el artículo XIX; fue la Ronda Uruguay la que estableció el Acuerdo sobre Salvaguardias, que aporta claridad e introduce ciertas modificaciones. El Acuerdo sobre Salvaguardias se negoció en gran parte porque las partes contratantes del GATT venían aplicando cada vez más una diversidad de medidas de las llamadas "de zona gris" (limitaciones voluntarias bilaterales de las exportaciones, acuerdos de comercialización ordenada y medidas similares) para limitar las importaciones de determinados productos. Estas medidas no se establecían al amparo del artículo XIX y, por consiguiente, no estaban sujetas a disciplina multilateral en el marco del GATT y su legalidad en dicho marco era dudosa. El Acuerdo prohíbe ahora claramente esas medidas y establece disposiciones específicas para la eliminación de las vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC[3].

El Acuerdo sobre Salvaguardias establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del GATT de 1994. Este Acuerdo define en su artículo 2 a las medidas de salvaguardia como medidas "de urgencia" con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del Miembro importador[4].

[3] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm
[4] **Acuerdo sobre Salvaguardias**
Artículo 2

Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los Miembros de la OMC[5]. Los principios rectores del Acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los siguientes: deberán ser temporales; solo podrán imponerse cuando se determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción nacional competidora; se aplicarán generalmente de manera no selectiva; se liberalizarán progresivamente mientras estén en vigor; entre otros.

6.2 De la organización interna del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

La presente propuesta legislativa tiene por objeto otorgar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la capacidad técnica de aplicar Salvaguardias para proteger al consumidor y la producción nacional. Asimismo, establece que la Comisión Multisectorial creada por Decreto Supremo N°020-98-ITINCI, no pueda cuestionar, controvertir o desestimar nada de lo consignado en el Informe Técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias que recomiende imponer salvaguardias provisionales o definitivas, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico respectivo.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Ley y en sus normas complementarias y reglamentarias[6].

Entre las Comisiones del Área de Competencia, en el artículo 20 del Decreto Legislativo N° 1033 figuran las siguientes:

Condiciones
1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho Miembro ha determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de ese producto en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o directamente competidores.

[5] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/safeg_s/safeg_info_s.htm

[6] Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Artículo 20.- De las Comisiones del Área de Competencia. -

El Área de Competencia está compuesta por las siguientes Comisiones:

a) Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
b) Comisión de Defensa de la Libre Competencia.

c) Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
d) Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.
e) Comisión de Protección al Consumidor.
f) Comisión de Procedimientos Concursales.

En ese orden, el numeral 1 del artículo 26 del citado decreto legislativo refiere

Artículo 26.- De la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias. -

26.1 ***Corresponde a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias*** *velar por el cumplimiento de las normas que persiguen evitar y corregir el daño en el mercado provocado por prácticas de dumping o subsidios, a través de la imposición de derechos antidumping o compensatorios;* ***actuar como autoridad investigadora en procedimientos conducentes a la imposición de medidas de salvaguardia****; y, efectuar el control posterior y eliminación de barreras comerciales no arancelarias, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos internacionales suscritos por el Perú, los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos de libre comercio, y las normas supranacionales y nacionales vigentes correspondientes.*

6.3 De la aplicación de las medidas de salvaguardias

El Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N° 017-2004-MINCETUR, tiene por objeto reglamentar el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incorporado a la legislación nacional mediante la Resolución Legislativa Nº 26407[7].

La aplicación de medidas de salvaguardia, además del daño real o potencial a una determinada rama de la producción nacional, debe considerar los efectos – análisis técnico-político – que una decisión de esa naturaleza puede causar en los otros agentes del mercado (como los demás integrantes de la cadena productiva, los

[7] Artículo 1 del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N°017-2004-MINCETUR, que aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos de Salvaguardias y de Textiles y Vestidos de la Organización Mundial del Comercio.

consumidores y los países exportadores), así como otros argumentos de interés. En ese sentido, para efectos de imponer una medida de salvaguardia, el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC establece que debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos: (i) incremento significativo de las importaciones investigadas; (ii) daño o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional; y, (iii) la relación de causalidad entre los elementos antes mencionados.

Las medidas de salvaguardia pueden consistir en un gravamen arancelario o una restricción cuantitativa sobre las importaciones de un determinado producto, cualquiera sea su origen.

Una mercancía está sujeta a una restricción cuantitativa cuando se establece un límite (cantidad, peso, valor) dentro del cual se pueden realizar operaciones de importación, superado dicho límite no cabe la posibilidad de introducir la mercancía en el territorio que ha aplicado la medida de salvaguardia, medida que incidirá en la política de comercio exterior del país.

Por otro lado, las medidas de salvaguardia comprenden también el incremento de la tarifa arancelaria aplicable a las importaciones de determinados productos.

¿Qué es un arancel?[8]

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones. En el caso del Perú y muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones.

En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel de Aduanas 2022, aprobado mediante Decreto Supremo N° 404-2022-EF, publicado el 31 de diciembre de 2021 y puesto en vigencia a partir del 01 de enero de 2022. El Arancel de Aduanas 2022 ha sido elaborado en base a la Séptima Recomendación de Enmienda del Consejo de Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a la nueva Nomenclatura ANDINA (NANDINA), aprobada mediante Decisión 885 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las cuales también entraron en vigor el 01 de enero de 2022.

El Arancel de Aduanas del Perú y modificatorias comprende en la actualidad a 8017 subpartidas nacionales a 10 dígitos, las que se encuentran contenidas en 21 Secciones y 98 Capítulos. El Capítulo 98 (14 subpartitas) corresponde a mercancías con algún tipo de tratamiento especial. La estructura del Arancel de Aduanas incluye el código de subpartida nacional, la descripción de la mercancía y el derecho ad-valorem. Los derechos ad-valorem son expresados en porcentaje, los que se aplican

[8] https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100852&lang=es-ES&view=article&id=287

sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight, "Costo, Seguro y Flete") de importación.

¿Cuáles son los tipos de aranceles?[9]

Los tipos de aranceles son los siguientes:

- Arancel *ad-valorem* es el que se calcula como un porcentaje del valor de la importación CIF, es decir, del valor CIF de la importación que incluye costo, seguro y flete.
- Arancel *específico* es el que se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación.
- Arancel *mixto* es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel específico.

En nuestro país, los niveles arancelarios ad-valorem aplicados a terceros países (nación más favorecida, NMF) para el 100 por ciento del universo arancelario son de tasas arancelarias de 0, 6 y 11 por ciento (ver Cuadro 1). Es de resaltar que el 72 por ciento del número de subpartidas nacionales, que involucra al 78 por ciento en términos de valor de las importaciones del año 2022 (enero-agosto), se encuentra sujeto a un arancel de cero por ciento, que incluye al 100 por ciento de los bienes de capital.

El arancel promedio nominal es 2,1 por ciento (el promedio ponderado por importaciones es de 1,5 por ciento) y la dispersión arancelaria es 3,6 puntos porcentuales. En virtud de la vigencia de los acuerdos comerciales con los principales socios comerciales del Perú, los cuales han eliminado aranceles para el comercio bilateral o han ido reduciendo el arancel NMF según calendarios de desgravación, el arancel efectivo (recaudación arancelaria efectiva como proporción del total del valor CIF de importaciones) se mantiene en 0.7% entre enero y agosto de 2022. A fines de agosto de 2022, el Arancel de Aduanas incluye dos modificatorias (Decreto Supremo N° 163-2022-EF y Decreto Supremo N° 194-2022-EF), por lo que, el total de subpartidas nacionales es de 8017 ítems, y excluyendo el número de subpartidas del Capítulo 98, es de 8003.

[9] Ibídem.

PERÚ: ESTRUCTURA ARANCELARIA

NIVELES ARANCELARIOS AD-VALOREM	SUBPARTIDAS NACIONALES		IMPORTACIÓN 2022 (Ene-Ago) VALOR CIF	
	N°	(%)	Mill. US$	(%)
0	5,727	71.6	31,612.6	78.1
6	1,602	20.0	7,200.3	17.8
11	674	8.4	1,681.6	4.2
Total	8,003	100.0	40,494.5	100.0
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL-SIMPLE				2.1
DISPERSIÓN ARANCELARIA (DESVIACIÓN ESTÁNDAR)				3.6
ARANCEL EFECTIVO 1_/				0.7
ARANCEL PROMEDIO PONDERADO POR VALOR DE IMPORTACIONES				1.5

1_/ Arancel efectivo = (Monto de recaudación Advalorem CIF / Monto de importacion CIF)*100.

Notas:

1) Elaborado en base al Arancel de Aduanas 2022, aprobado por Decreto Supremo N° 404-2021-EF, y modificatorias (DS 163-2022-EF y DS 194-2022-EF).

2) No incluye subpartidas del "Capítulo 98 Mercancías con tratamiento especial" del Arancel de Aduanas.

3) Se considera la rebaja arancelaria temporal a 0% para un grupo de productos relacionado con el Covid 19, acorde con el Decreto Supremo N° 059-2020-EF.

Fuente: SUNAT, MEF
Elaboración: MEF

Por otro lado, existe el Sistema de Franja de Precios, el cual incluye 48 subpartidas nacionales relativas a azúcar, maíz, arroz y algunos lácteos, incluidas en el Anexo 1 del Decreto Supremo N° 103-2015-EF. Este mecanismo permite aplicar aranceles específicos variables (cuando el precio de referencia internacional se encuentre por debajo del precio piso de la franja), así como realizar rebajas arancelarias (cuando el precio de referencia internacional supera el precio techo de la franja).

Mediante Decreto Supremo N° 147-2022-EF publicado el 30 de junio de 2022, se ha aprobado la actualización de las Tablas Aduaneras del Maíz, Azúcar y Lácteos con vigencia desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se ha dispuesto que la Tabla Aduanera del Arroz aprobada por Decreto Supremo N° 152-2018-EF tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

¿Quiénes pagan aranceles?

Las personas y empresas residentes y no residentes que realizan actividades de importación al Perú de bienes afectos al pago de derechos arancelarios a través de las aduanas de la República, salvo las exoneraciones e inafectaciones establecidas por ley para productos y actividades específicos.

6.4 Del procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia en INDECOPI

Según lo previsto en el Reglamento sobre Salvaguardias, el procedimiento para la aplicación de medidas de salvaguardia contempla dos fases claramente diferenciadas: una fase de investigación, a cargo de la Comisión de Dumping,

Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB); y una fase de decisión o resolución, a cargo de la Comisión Multisectorial conformada por los Ministros de Estado de las carteras de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Economía y Finanzas (MEF) y del sector al que corresponde la rama de producción nacional afectada por las importaciones (en adelante, Comisión Multisectorial)[10].

En la primera fase del procedimiento, la CDB es la autoridad competente para decidir el inicio de la investigación y la responsable de conducir y desarrollar la investigación en cuestión, para lo cual realiza un conjunto de actuaciones establecidas en el Reglamento sobre Salvaguardias, a efectos de recopilar información necesaria para el análisis de los elementos técnicos previstos en la normativa sobre salvaguardias[11]. Dicho procedimiento se desarrolla por un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución que dispone el inicio del procedimiento, y concluye con la emisión de un Informe Técnico mediante el cual la CDB recomienda la aplicación o no de las medidas de salvaguardia correspondientes.

En la segunda fase del procedimiento, la Comisión Multisectorial cumple el rol de autoridad resolutiva, pues es a dicho órgano al cual el Reglamento sobre Salvaguardias le confiere exclusivamente la potestad de decidir la aplicación o no de las medidas solicitadas.

Según se observa, en los procedimientos en materia de salvaguardia existe una separación de funciones entre la CDB y la Comisión Multisectorial. Ello debido a que la CDB ejerce únicamente una función administrativa consistente en llevar a cabo la investigación del procedimiento sobre salvaguardias, mientras que la Comisión Multisectorial conformada por 3 Ministros de Estado, al momento de optar por la imposición o no de la medida de salvaguardia, ejerce funciones que exceden la función administrativa dado que debe realizar un análisis de conveniencia (por interés

---

[10] **REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS**
Artículo 6.- La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante la Autoridad Investigadora, es la entidad encargada de la investigación prevista dentro del procedimiento para la aplicación de las medidas de salvaguardia, de conformidad con lo establecido en la presente norma.
Artículo 7.- Las decisiones relativas a la aplicación, suspensión y revocación de medidas de salvaguardia, así como la modificación o prórroga de los plazos correspondientes a la aplicación de las mismas, serán de competencia exclusiva de la Comisión Multisectorial y se adoptarán basándose en el informe técnico elaborado por la Autoridad investigadora como resultado de la investigación realizada.

[11] **REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS**
Artículo 20.- En la investigación, para determinar si el aumento de las importaciones de un determinado producto ha causado o amenaza causar un daño grave, se deberá tener en cuenta todos los factores de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de la rama de producción afectada, en particular los siguientes:
i) el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del producto, en términos absolutos y en relación con la producción y el consumo nacional;
ii) la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento;
iii) el precio de las importaciones, especialmente con el fin de determinar si se han registrado precios considerablemente inferiores al precio corriente del producto nacional similar o directamente competidor;
iv) las repercusiones sobre la rama de producción nacional de los productos similares o directamente competidores, evidenciadas en cambios de los factores económicos, identificados en el Artículo 8 7.a.
v) otros factores que, aunque no estén relacionados con la evolución de las importaciones, tengan una relación de causalidad con el daño o la amenaza de daño a la rama de producción nacional de que se trate.

público y efecto en las relaciones comerciales internacionales) de la aplicación de la medida de salvaguardia[12].

Si bien el Reglamento sobre Salvaguardias establece que la decisión de la Comisión Multisectorial se adoptará basándose en el informe técnico elaborado por la CDB como resultado de la investigación realizada, dicha norma también es clara en señalar que, la Comisión Multisectorial deberá evaluar otros elementos de índole político que determinen la conveniencia o no de aplicar medidas de salvaguardia.

En efecto, la Comisión Multisectorial deberá evaluar el interés público general del país tomando en consideración los efectos de la imposición de las medidas de salvaguardia tanto en el ámbito nacional como respecto de las relaciones comerciales con los países eventualmente afectados. Ello implica un análisis sobre las consecuencias económicas y políticas con nuestros socios comerciales y en la política de comercio exterior del país, siendo que el MINCETUR (miembro de la Comisión Multisectorial) es el órgano competente para formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior del país[13], y que el MEF (miembro de la Comisión Multisectorial) es la autoridad competente de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria[14].

En ese sentido, la propuesta del proyecto de ley referida a que la Comisión Multisectorial no puede cuestionar, controvertir o desestimar los hallazgos consignados en el informe técnico elaborado por la CDB, debiendo aplicar las recomendaciones que se derivan del Informe Técnico respectivo, impediría que se efectúe el análisis del interés público general del país, así como el análisis del efecto en las relaciones comerciales con los países exportadores eventualmente afectados con la medida, funciones que únicamente podrían ser llevadas a cabo por la Comisión Multisectorial en su calidad de órgano político integrado por 3 Ministerios.

En efecto, la iniciativa legislativa en mención pretende concentrar la instancia investigadora y la decisoria en la CDS, restringiendo la función de la Comisión Multisectorial, pese a que el rol de ésta última va más allá de las funciones asignadas a la autoridad investigadora, al tener que conjugar los hechos que sustentan el informe técnico con el interés público; por lo que no es razonable ni técnico convertir

---

[12] Capítulo II del Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI, modificado por el Decreto Supremo N°017-2004-MINCETUR, que aprueban normas reglamentarias de los Acuerdos de Salvaguardias y de Textiles y Vestidos de la Organización Mundial del Comercio

[13] **Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobada por Ley N° 27790**
Artículo 2.- Competencia
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo.
(...)

[14] **Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobada por Decreto Legislativo N° 183**
Artículo 5.- Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la tributación, política aduanera, financiación, endeudamiento, presupuesto, tesorería y contabilidad, así como armonizar la actividad económica nacional.

a esta Comisión en una instancia cuyo único rol sería tomar conocimiento y ejecutar lo dispuesto en el informe de la CDS, desnaturalizando así el procedimiento de aplicación de salvaguardias, desarrollado en el marco de la Resolución Legislativa N° 26407, pudiendo contraer graves consecuencias a nuestro país ante la comunidad internacional.

En consecuencia, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley no tienen respaldo en las normas que regulan la aplicación de medidas de salvaguardia en el marco del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC.

6.5 De la competencia constitucionalmente asignada

Conforme a lo expuesto en el parágrafo anterior, queda claro que el proyecto de ley modificaría la estructura interna de un organismo gubernamental pues, de entrar en vigor, se estaría modificando tácitamente las competencias del INDECOPI, establecidas en el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, y en el artículo 43 de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 099-2009-PCM, lo cual es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

De igual modo, y en concordancia con las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, la decisión de imponer medidas de salvaguardia en el país corresponde a competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, consistentes en dirigir la política exterior y regular las tarifas arancelarias[15].

En efecto, las medidas de salvaguardia constituyen medidas de política arancelaria, la cual, conforme a la Constitución, es de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y corresponde ser regulada vía decreto supremo. En conclusión, la decisión de establecer cuáles son las entidades responsables de investigar, por una parte, y de imponer una medida de salvaguardia, por otra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 74° y 118°, numeral 20, de la Constitución Política del Perú, es de competencia del Poder Ejecutivo, en línea con lo señalado por el Tribunal

---

[15] **CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ. -**
Artículo 74.- Principio de legalidad en materia tributaria. -
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en
caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo.
(...)
Artículo 118.- Atribuciones y obligaciones del Presidente. -
Corresponde al Presidente de la República:
(...)
11. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; y celebrar y ratificar tratados.
(...)
20. Regular tarifas arancelarias.
(...)

Constitucional (Fundamentos 25 y 26 de la Sentencia recaída en el Exp. N° 1405-2010-PA/TC); por lo que, no corresponde que el Congreso, mediante una Ley, efectúe las modificaciones contenidas en el Proyecto de Ley para otorgar al INDECOPI la competencia para aplicar una medida de salvaguardia.

Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente recaída en el N° 1405-2010-PA/TC

> *25. En cuanto a la potestad tributaria en materia aduanera la Constitución de 1993 ha dispuesto que la materia arancelaria se excluya del ámbito de la reserva de ley tributaria, al otorgarle al Poder Ejecutivo la potestad de regular dicha materia mediante decreto supremo, conforme a lo establecido en sus artículos 74° y 118°, inciso 20.*
>
> *26. Es decir, la política arancelaria es atribución del Presidente de la República y se regula por el Poder Ejecutivo (artículos 74° y 118°, inciso 20 de la Constitución de 1993). En esa línea, la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas la incluye como su competencia, y de acuerdo a la Resolución Ministerial N.° 005-2006-EF/15, el Poder Ejecutivo ha establecido que la política arancelaria es de reducción progresiva de aranceles, con el fin de promover una competencia que mejore la eficiencia productiva a través de una mejor asignación de recursos productivos y el mayor bienestar del consumidor, a través del acceso a bienes y servicios de menor costo y mayor calidad. Es decir, se orienta a la mejora en la eficiencia en la asignación de recursos de toda la economía a través de la competencia y con ello al aumento del bienestar general de la población.*

El principio de competencia, que opera como regla complementaria del principio de jerarquía normativa, implica la atribución a un órgano o ente concreto de la potestad de regular determinadas materias o de dictar cierto tipo de normas con exclusión de los demás, para lo cual la Constitución establece ordenamientos o sistemas jurídicos autónomos que se corresponden usualmente con la atribución de autonomía a determinadas organizaciones, aunque también hace se referencia al ejercicio de una función determinada.

Fundamento 2.15 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en los Expedientes 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumulados)

> *15. (...) el principio de competencia es tributario del de jerarquía, pues si una entidad estatal puede incurrir en la expedición de una norma inválida por invadir esferas competenciales previstas como ajenas por otra norma de su mismo rango, es porque la Norma Normarum (Constitución), fuente normativa jerárquicamente superior a cualquier otra, reservó en ésta la capacidad de regular la distribución competencial.*

Los artículos I y VI del Título Preliminar de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establecen que las entidades que conforman el Poder Ejecutivo se rigen, entre otros, por el Principio de Legalidad, según el cual las autoridades, funcionarios y servidores del referido poder, están sometidos a la Constitución Política del Perú, entre otros como, por el Principio de Competencia, en virtud del cual cada entidad ejerce sus funciones y atribuciones sin intervenir en aquellas que son cumplidas por los otros niveles de gobierno o sectores.

Además, considerando que las medidas de salvaguardia pueden consistir en un incremento de aranceles sobre las importaciones del producto investigado, ello conllevaría una modificación y regulación de las tarifas arancelarias, cuya competencia es exclusiva del Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 118 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, resulta apropiado que sea una autoridad política, como es el caso de la Comisión Multisectorial, la que establezca la decisión de aplicar o no la medida de salvaguardia que pueda ser recomendada por el Indecopi, efectuando el análisis a que se hace referencia en el considerando precedente.

El principio de reserva legal en materia tributaria es un aspecto subsecuente de lo que la doctrina denomina potestad tributaria del Estado. Consiste en que los aspectos esenciales de los tributos que el Estado impone a las personas, deben ser aprobados por norma con rango de ley, esto es, ley o decreto legislativo, siempre que ocurra la delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo, de conformidad con el artículo 104 de la Constitución[16].

El principio de la reserva de la ley es correctamente entendido solo en la medida que el poder o potestad tributaria esté centralizado en el Poder Legislativo "no siendo viable la creación, modificación o supresión de tributos con instrumentos que no sean ley en sentido formal o por órganos distintos al Congreso"[17]. No obstante, quedan exceptuados de esta norma y pueden ser aprobados por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, entre otros, los aranceles[18].

En efecto, los aranceles son tributos a la importación de bienes y, conforme al numeral 20 del artículo 118 de la Constitución, su regulación corresponde al Presidente de la República. Es razonable entonces que los aranceles sean fijados por el Poder Ejecutivo y no por norma con rango de ley, porque son más un

---

[16] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Editora RAO S.R.L. Quinta Edición: Setiembre de 1999 Lima, Perú. p. 385.

[17] ZOLEZZI MOLLER, Armando: "El Régimen Tributario en la nueva Constitución" en La Constitución de 1993: Análisis y Comentarios. Tomo 11. Comisión Andina de Juristas, Lima, p. 148.

[18] **Artículo 118.- Atribuciones y obligaciones del Presidente. -**
Corresponde al Presidente de la República:
(...)
20. Regular tarifas arancelarias.
(...)

instrumento de la política macroeconómica, que un tributo cuya finalidad central sea dar recursos económicos al Estado.

Es obvio que, al ser los aranceles – al igual que las tasas – un caso excepcional al principio de reserva legal, no puede el Congreso dictar normas al respecto, pues son de competencia constitucionalmente establecida en favor del Poder Ejecutivo.

El marco legal de la política arancelaria es el siguiente:

- **Constitución Política del Perú**
  Dispone que la regulación de tarifas arancelarias es competencia exclusiva del Presidente de la República (numeral 20°, artículo 118°) y que los aranceles se regulan mediante decreto supremo (artículo 74°).

- **Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas (Decreto Legislativo Nº 183)**
  Establece que la política arancelaria es competencia del MEF (artículo 5º).

- **Lineamientos de Política Arancelaria (Resolución Ministerial Nº 005-2006-EF)**
  Establece el diseño de la política arancelaria y el objetivo de esta, el cual es crear mayor eficiencia productiva y bienestar al consumidor.

En conclusión, de acuerdo con el artículo 74 y el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la facultad de regular la política arancelaria corresponde al Poder Ejecutivo, siendo el Presidente de la República el que tiene la función de regular los aranceles. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, éste ostenta la competencia en política arancelaria, la cual es determinada a través de Decretos Supremos. Asimismo, existen los Lineamientos de Política Arancelaria (Resolución Ministerial N° 005-2006-EF), el cual señala que su orientación básica es la de reducir el promedio y dispersión arancelarios.

La competencia del Gobierno Nacional, asimismo, queda claramente establecida en el artículo 26.1. literal h) de la Ley de Bases de la Descentralización, cuando señala que (s)on competencias exclusivas del gobierno nacional: (...) h) Régimen de comercio y aranceles; (...)

Finalmente, la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en la regulación de la política arancelaria no solo está constitucionalmente consagrada, sino existe profusa jurisprudencia constitucional

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0031-2005-PI/TC

28. Por el contrario, el artículo 118.3 de la Constitución reconoce la facultad del Presidente de la República para dirigir la política general del Gobierno,

política dentro de la cual está comprendida, como es evidente, la política económica que atañe a la nación. El mismo artículo en su inciso 11, también prevé la potestad del Presidente de la República de dictar medidas extraordinarias, a través de decretos de urgencia, en materia económica y financiera cuando lo requiere el interés nacional y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República. No obstante, es el inciso 20 de la disposición constitucional mencionada el que expresamente reconoce que

[c]orresponde al Presidente de la República (...) regular las tarifas arancelarias.

31. Es decir, que el régimen jurídico del comercio nacional y el establecimiento de las tarifas arancelarias es una competencia exclusiva y excluyente del Gobierno Nacional. (...)

VII. COSTO-BENEFICIO

Sobre el particular, debemos considerar lo establecido por el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley N° 26889, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2022-JUS que establece lo siguiente:

"Artículo 9.- Análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma

9.1 El análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos es empleado para conocer en términos cuantitativos y/o cualitativos los efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios, o en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables. No se debe limitar al análisis de materias únicamente patrimoniales y/o presupuestales.

9.2 La necesidad de la norma debe estar debidamente justificada dada la naturaleza de los problemas existentes, los costos y beneficios probables de la aprobación y aplicación de la norma y los mecanismos alternativos que existan para solucionar dichos problemas.

9.3 El análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma es obligatorio en todos los proyectos normativos, y en particular en aquellas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas o de reformas del Estado; así como leyes que incidan en aspectos económicos, financieros, productivos o tributarios; y leyes relacionadas con política social y ambiental.

No obstante, queda claro por los fundamentos de derecho contenidos en el presente dictamen la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en la regulación de la política arancelaria constitucionalmente consagrada, por lo que resulta innecesario pronunciarse sobre el costo beneficio de la propuesta legislativa materia de estudio.

Ello debido a que, en este caso en particular, independientemente de la conveniencia económica o política de la propuesta legislativa, esta es incompatible con el texto constitucional por lo que huelga referirse a la oportunidad de la iniciativa en el ordenamiento jurídico nacional.

VIII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomienda, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **NO APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 1057/2021-CR y su envío al **ARCHIVO**.

Salvo mejor parecer.
Dese cuenta.
Sala de la Comisión
Lima, 09 de noviembre d

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24/11/2022 16:11:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 11:13:08-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 24/11/2022 16:12:14-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TORRES SALINAS Rosio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/11/2022 11:17:03-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUITO SARMIENTO Bernardo Jaime FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/11/2022 15:52:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: HERRERA MEDINA Noelia Rossvith FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/11/2022 17:35:09-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTALVO CUBAS SEGUNDO TORIBIO FIR 16655831 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/11/2022 14:07:07-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** mar 20 **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo, pasó al archivo. —

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción nacional".

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIZARZABURU LIZARZABURU Juan Carlos Martin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 15:06:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/11/2022 17:38:28-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 12:33:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTEZA FACHO Silvia Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 11:10:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: RAMIREZ GARCIA Tania Estefany FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/11/2022 15:20:38-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 10:54:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ZEBALLOS MADARIAGA Carlos Javier FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 19:38:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BELLIDO UGARTE Guido FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/11/2022 13:01:42-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORI CELIS Juan Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/11/2022 18:04:02-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TACURI VALDIVIA German Adolfo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/11/2022 11:44:25-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/11/2022 15:36:30-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ANDERSON RAMIREZ Carlos Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/11/2022 09:59:10-0500

Lima, 14 de noviembre de 2022

OFICIO Nº 580-2021-2026-DC-RTS/CR

Señora:
ROSANGELLA BARBARAN REYES
Presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera

Lima. -

Asunto: **Imposibilidad de firma digital por problemas con el Certificado digital RENIEC.**

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, e informarle que la Congresista **Rosio Torres Salinas** titular de la Comisión, no puede firmar digitalmente los Dictámenes aprobados por la Comisión, por cuanto hasta la fecha RENIEC no ha enviado la autorización del Certificado Digital, habiendo recibido la información vía correo que el trámite se dará dentro de tres días hábiles.

Sin otro particular, me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

Jesús Humberto SIERRA TAPIA
Asesor Principal

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 09:57
Para: klarco@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: 5a6b06d6e7919de83824e14b94ed7a3b.pdf; be3291cc887203a25eca15a00bd28943.pdf

[Solicitante]: klarco@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: Se adjunta Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1057/2021-CR, que propone la "Ley para consolidar las facultades del INDECOPI en defensa del consumidor y de la producción Nacional. Asimismo indicar que la votación está en el dictamen y que se pidió la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados, también se adjunta justificación de la Congresista Rosio Torres Salinas.
[Fecha]: 2022-11-25 09:56:53
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.